Recomendación N°	18/2016
Autoridad Responsable	Director General de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí
Expediente	1VQU-087/2015
Fecha de emisión	3 de Agosto de 2016

HECHOS

Este Organismo Estatal inició la investigación por posibles violaciones a los derechos humanos de V1, atribuibles a elementos de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí, por violación a los derechos humanos a la vida, salud e integridad personal en agravio de V1.

Q1, esposa de V1, manifestó que el 1 de febrero de 2015, cerca de las 12:30 horas, su esposo quien había ingerido medicamento, para tratamiento de depresión crónica y de fibromialgia, salió de su domicilio, y a las 12:45 horas, T1, le informó vía telefónica que al caminar por la cancha Mórelos con dirección a la calle Mariano Jiménez, Zona Centro, en esta Ciudad, observó a una patrulla de la Policía Municipal y en la parte posterior de la cajuela iba una persona a quien se le cayó la cartera la cual pertenecía a V1.

Q1 preciso que a las 14:30 horas, acudió a la barandilla municipal ubicada en la colonia Abastos, y se entrevistó con AR1, Juez Calificador en turno de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí, quien le informó que V1, recobró su libertad por indicaciones del médico legista al encontrarse en estado de ebriedad; sin embargo al salir de la barandilla una persona del sexo femenino le informó que V1, había salido de la comandancia en compañía de dos oficiales municipales, estaba vomitando y se queja de dolor, al observar que los policías no le brindaron la atención médica, realizó grabación con su teléfono celular. Que a las 19:00 horas de ese día, agentes de la Policía Ministerial le informaron que V1 había fallecido.

Por su parte, en su testimonio, Q2 refirió que el 1 de febrero de 2015, a las 20:30 horas, elementos de la Policía Ministerial del Estado se presentaron en su domicilio y le informaron que habían reportado a un cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino que se encontraba en la zona de abastos en este Municipio y al mostrarle la fotografía del cuerpo, identificó a su hermano V1.

Derechos Vulnerados

✓ A la vida, salud e integridad personal

OBSERVACIONES

En tal sentido, del análisis lógico jurídico realizado al conjunto de evidencias que se integraron al expediente de queja 1VQU-087/2015, se encontraron elementos suficientes que permiten acreditar que en el presente caso se vulneró el derecho a la vida, a la salud e integridad personal de V1 atribuibles a elementos de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí, consistente en insuficiente protección de persona, lo que ocasionó que V1 perdiera la vida, en atención a las siguientes consideraciones:

Los hechos indican que el 1 de febrero de 2015, V1, quien por referencia de sus familiares se encontraba en tratamiento por depresión y fibromialgia, salió de domicilio y a las 12:57 horas, fue detenido en la calle de Carranza y Uresti, Zona Centro en esta Ciudad, por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí, por ingerir bebidas alcohólicas y escandalizar en la vía pública.

Con base a las evidencias que se recabaron, se observó que V1, ingresó a la Comandancia Municipal. Que a las 13:05 horas, AR2, médico adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, realizó el certificado médico de integridad física e influencia alcohólica, a las 13:17 horas, se hizo presente V1 ante AR1, Juez Calificador en turno quien realizó audiencia al infractor y determinó dejarlo en libertad.

Ahora bien, del contenido de las videograbaciones de las cámaras ubicadas en esclusa, Juez Calificador y área de Justicia Cívica Comandancia Central, se constató que V1 fue detenido por elementos de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, quienes tripulaban la patrulla número 2540, al ingresar a la Comandancia Central. Se advirtió que al momento de ser certificado como al hacerlo presente ante AR1, Juez Calificador, V1, no podía sostenerse y permanecer de pie., a las 13:24 horas V1 egresa de la Comandancia y lo llevaban AR3 y AR4, encargados de turno, atención al público y cacheo.

En efecto, de las videograbaciones y testimonios se advierte que AR3 y AR4, sacaron a V1, de la Comandancia Central jalándolo y se desvaneció, lo que es coincidente con lo manifestado por Q1, quien refirió tener conocimiento que AR3 y AR4, encargados de turno, atención al público y cache, fueron los encargados de sacar de la Comandancia Municipal a su esposo y omitieron brindarle atención médica no obstante que se encontraba vomitando y no podía permanecer de pie.

Se advierte que V1 estaba tirado en el piso y los policías municipales estaban desconcertados ya que estaba vomitando y solicitaron se trajera una patrulla. Se corroboró que el video fue grabado el 1 de febrero de 2015, ya que en el audio se menciona el nombre de una persona detenida que estaba registrada en la bitácora de ingreso a la barandilla municipal.

Ahora bien Q1, refirió que al entrevistarse con AR1, Juez Calificador, le informó que su esposo V1, salió en libertad por indicaciones del médico, ya que se encontraban en estado de ebriedad, y de acuerdo al certificado médico emitido por AR2 médico adscrito, V1, estaba sobrio y padecía de trastorno psiquiátrico, lo cual pone en entredicho el argumento que expuso el Juez Calificador.

Aunado a lo anterior, es fundamental destacar la investigación realizada por los agentes de la Policía Ministerial del Estado, quienes al realizar la videograbación de las cámaras de video vigilancia de las bodegas ubicadas en la calle de Israel, Fraccionamiento B. Anaya Segunda Sección, en la cámara 6 a las 14:48:47 horas, observaron el ingreso de la unidad policiaca 2950, al área de descarga de las bodegas y tanto los ocupantes de la caja como el conductor bajan a un cuerpo el que posteriormente fuera reportado por el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, C4, a las 16:30 horas ya sin vida.

En el mismo sentido, la Titular de la Unidad de Inteligencia de la Policía Ministerial del Estado, en la Averiguación Previa 1, realizó la inspección del contenido de los archivos digitales que obran en la indagatoria, y observó que el 1 de febrero de 2015, en la zona de bodegas del Fraccionamiento B. Anaya, llegó al lugar una patrulla de la cual descienden varias personas vestidas de color oscuro y a las 14:48:32 horas, las personas abren la puerta trasera del vehículo, cargando a una persona para bajarla y dejarla en el piso; a las 14:48:46 horas, se observa el momento que se retira el vehículo dejando abandonado en el piso a la persona, la cual no se mueve.

Por lo expuesto, la evidencia permite advertir que AR1, AR2, AR3 y AR4, no realizaron las acciones adecuadas tendientes a salvaguardar la integridad, salud y vida de V1, ya que tenía la obligación de garantizar la integridad física de quienes se encuentran allí remitidos, así como prevenir cualquier eventualidad que pudiese ocurrir durante su estancia, máxime en los casos en que una persona presente signos severos de intoxicación o se encuentre bajo los efectos de solventes, drogas, enervantes, psicotrópicos o cualquier otra sustancia que altere su sistema psicomotor y que le impida valerse por sí mismo.

En este orden de ideas, la autoridad municipal no garantizó la integridad física de V1, al determinar dejarlo en libertad no obstante que no podía valerse por sí mismo, situación que observó desde que ingresó a la Comandancia Centro, y al momento que se realizó la audiencia al infractor, tal es el caso que no pudo firmar y plasmó su huella. Aunado a que informaron que a Q1, que V1, había salido en libertad por encontrarse en

estado de ebriedad, situación que no se confirma ya que el certificado médico expedido por AR2, médico adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, refiere que V1, se encontraba sobrio.

En lo que respecta a AR2, omitió especificar en el certificado médico que era necesario remitirlo a un nosocomio, para su valoración médica, no obstante que al efectuar la valoración médica observó que V1, se encontraba sobrio, padecía de trastorno psiquiátrico y su sistema psicomotor estaba deteriorado.

Por lo que AR1 Juez Calificador y AR2, médico adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí, tenían la obligación conjunta de tomar todas y cada una de las medidas preventivas a fin de salvaguardar la vida de V1, es decir, se encontraban obligados a tener bajo observación directa al ahora occiso hasta en tanto no tuvieran la completa seguridad de que éste pudiese valerse por sí mismo y sin riesgo a que con motivo del estado de salud que padecía se produjera alguna desgracia en su humanidad, o bien enviarlo al centro de atención médica correspondiente para su respectiva valoración o, en su defecto, localizar a algún familiar para que se hiciera cargo de la situación.

Por lo anterior, es de llamar la atención la conducta que desplegaron los servidores públicos en el presente caso, en particular a AR3 y AR4, elementos adscritos a la Comandancia Central, encargados de turno, atención al público y cacheo, ya que no realizaron adecuadamente sus funciones y, con ello, no garantizaron debidamente la seguridad e integridad física de V1, al omitir brindarle la atención médica al momento que V1 egresó de la Comandancia Municipal.

Además de lo anterior, quedó acreditado que AR5, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí, tripulantes de la patrulla número 2950, después de que egresó V1 de la Comandancia Municipal Centro, lo trasladaron a las bodegas ubicadas en el Fraccionamiento B. Anaya Segunda Sección, en esta Ciudad, y lo abandonaron no obstante del estado de salud que se encontraba, dejándolo en total desamparo, ya que por sus circunstancias no le permitían proveer a su propio cuidado, lo que ocasionó que V1 falleciera, por infarto agudo al miocardio, el cual es una urgencia médica por definición y se debe buscar atención médica inmediata y no le brindaron la atención médica, dejándolo en estado de abandono.

En tal tesitura la autoridad señalada como responsable de la violación a derechos humanos, no respetó la máxima referente a que el Estado debe ser el garante de la seguridad personal de quienes se encuentren privados de su libertad, independientemente de la causa que origine su detención, es decir, la autoridad debe extremar precauciones e instrumentar acciones que deben tutelar la seguridad física de todos y cada una de la personas que permanecen bajo su custodia; por lo que en el presente caso quedó en evidencia que AR1, AR2, AR3 y AR4 no velaron por la adecuada protección de integridad física de V1. Así como AR5, elementos que tripulaban la patrulla número 2950, abandonaron en un predio a V1, lo que ocasionó que perdiera la vida.

En este contexto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Tibi Vs. Ecuador, sentencia de 7 de septiembre de 2004, párrafos 154 y 156, mencionó que el principio XXIV para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión determina que se ofrecerá a toda persona detenida un examen médico apropiado con la menor dilación posible después de su ingreso en el lugar de detención y, posteriormente, recibirán atención y tratamiento médico cada vez que sea necesario. Que la atención y tratamiento médico deben ser gratuitos. Que conforme al artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estado tiene el deber de proporcionar a los detenidos revisión médica regular y atención adecuada cuando se requiera, lo que en el caso no aconteció ya que AR2, médico no sugirió alguna atención médica, y además se advirtió que AR3 y AR4, al percatarse que V1 vomitaba y se desvanecía no dieron parte a sus superiores para que la víctima recibiera la atención médica oportuna y en cambio fue entregado a AR5, tripulantes de la patrulla 2950, quienes lo abandonaron en un lugar despoblado.

En otro aspecto, de la evidencia se advirtió que al momento en que V1, quedó a disposición de la autoridad administrativa, AR1 Juez Calificador de la Comandancia Municipal no realizó acciones tendientes para la identificación de la víctima y no comunicó sobre el hecho de la detención a los familiares de V1, advirtiéndose que en cambio, su acción fue dejarlo en libertad aun y cuando no estaba en condiciones de salud adecuadas.

En efecto, AR1 no aportó elementos de convicción que acrediten que a V1, se le permitió tener comunicación con sus familiares o abogado por lo que se contravino lo dispuesto en el artículo 20, apartado B, fracciones II y VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se señala que toda incomunicación queda prohibida y será sancionada por la ley penal. De igual manera, vulneraron los artículos 8.2, inciso d, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14.3 incisos b y d del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los que en términos generales indican que toda persona inculpada tiene derecho a comunicarse.

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Gire sus instrucciones a quien corresponda para que se realicen acciones efectivas a efecto de garantizar el pago de la reparación del daño a los familiares de V1, que incluya el tratamiento médico y terapéutico que requiera, y se envíen a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento.

SEGUNDA. Colabore ampliamente en la integración de la Averiguación Previa 1, que se inició en la Procuraduría General de Justicia del Estado, con el propósito de que se integre en debida forma la indagatoria penal, por tratarse de servidores públicos de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí, cuya conducta motivó el presente pronunciamiento, y se aporte la información que al respecto le sea solicitada y tenga a su alcance.

TERCERA. Colabore ampliamente con la Contraloría Interna del Ayuntamiento Municipal, a efecto que substancie y concluya Procedimiento Administrativo de responsabilidad con motivo de la vista que realizó este Organismo en contra de los servidores públicos que participaron en los hechos, en razón de las consideraciones vertidas en la presente Recomendación, proporcionando para tal efecto las constancias que le sean requeridas.

CUARTA. Instruya a quien corresponda, a efecto de que se incluya en el programa de capacitación a Jueces Calificadores y elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí, el tema de derechos humanos, en particular a la legalidad y seguridad jurídica, de la guarda y custodia de detenidos, sobre los principios y normas de protección de los derechos y el derecho a la vida, así como los procedimientos para la certificación médica.

QUINTA. Colabore ampliamente con este Organismo Estatal, en el seguimiento e inscripción de los familiares de V1 en el Registro Estatal de Víctimas, previsto en la Ley de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, a efecto de que tenga acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que establece la Ley Estatal de Víctimas, y proporcione la información que se le solicite.